

El uso ilegal de las fuerzas armadas de Trump contra las manifestaciones antirracistas augura batallas por delante.

POR Marjorie Cohn, Truthout

PUBLICADO el 11 de junio de 2020



Miembros de la policía militar mantienen un perímetro cerca de la Casa Blanca mientras los manifestantes se reúnen para protestar por el asesinato de George Floyd el 1º de junio de 2020, en Washington, D.C. OLIVIER DOULIERY / AFP VIA GETTY IMAGES

La reacción contra la utilización ilegal de fuerza militar de Donald Trump para disolver las manifestaciones antirracistas lo obligó a retirar las tropas. Pero debemos seguir planteando la ilegalidad de este uso de fuerzas militares y para evitar futuros despliegues de este tipo. La amenaza de nuevas violaciones del mismo carácter subsiste mientras las protestas continúan y si Trump pierde las elecciones, todas las alternativas están abiertas.

Los funcionarios del gobierno, los legisladores, los abogados y la sociedad civil deben reclamar enérgicamente el retiro de las tropas federales porque su uso podría ser tanto mortal como ilegal. "Las fuerzas armadas que se enfrenten a los manifestantes pueden hacer que se vayan, pero no se equivoquen: La gente moriría. Y una muerte más es demasiado", escribió para Newsweek Kelsey Baker, un ex marine que desplegó acciones en Kuwait e Irak.

Aunque Trump no invocó la Ley de Insurrección para justificar su despliegue de tropas contra los negros y sus aliados, es muy posible que lo haga en el futuro. Una revisión de cómo Trump ordenó al personal militar de Washington, D.C. es instructiva y alarmante.

Mientras la indignación colectiva por el linchamiento policial de George Floyd llenaba las calles de todo el país, Donald Trump amenazó con utilizar el ejército de los Estados Unidos contra los manifestantes antirracistas que ejercían sus derechos en virtud de la Primera Enmienda.

El 28 de mayo, Trump advirtió que "enviaría a la Guardia Nacional y haría el trabajo bien hecho", tuiteando, "....estos GOLPES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el Gobernador Tim Walz y le he dicho que las Fuerzas Armadas están con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando empiece el saqueo, empezará el tiroteo. ¡Gracias!"

El 1º de junio, Trump anunció que había enviado tropas federales a Washington D.C. "para proteger los derechos de los americanos respetuosos de la ley, incluyendo sus derechos de la Segunda Enmienda". Trump dijo que estaba ordenando el envío de "miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley" a la capital de la nación.

El presidente de EE.UU. ve al Movimiento por las Vidas Negras como el enemigo a ser derrotado por sus militares. El intento de Trump de cooptar la memoria de Floyd y su apelación a su base del derecho de uso de armas fueron vergonzosos.

"Donald Trump es el primer presidente que veo en mi vida que no trata de unir al pueblo americano, ni siquiera pretende hacerlo. En lugar de eso, trata de dividirnos", acusó el ex Secretario de Defensa James Mattis.

"En todo el país las protestas contra la violencia policial han sido recibidas con más violencia policial", dijo Gerry Condon, ex presidente de Veteranos por la Paz (VFP), a Truthout. "Sin embargo, llamar al Ejército y a la Guardia Nacional empeorará las cosas, no las mejorará".

Además, sería ilegal.

Trump amenaza a los gobernadores y despliega tropas en Washington

Trump desafió a los gobernadores de la nación a desplegar un gran número de Guardias Nacionales para "dominar las calles". Advirtió: "te van a atropellar, vas a quedar como un idiota. Tenéis que dominar". El Secretario de Defensa Mark Esper se hizo eco de Trump, diciendo a los gobernadores, "cuanto antes se masifique y domine el espacio de batalla, más rápido se disipará y podremos volver a la normalidad".

Varios gobernadores dijeron gracias, pero no los queremos, gracias. "Rechazo la idea de que el gobierno federal pueda enviar tropas al estado de Illinois", dijo el gobernador de Illinois J. B. Pritzker a la CNN. "El presidente ha creado un momento incendiario aquí... Su retórica está inflamando las pasiones. Debería mantenerse al margen de nuestros asuntos. Todos los días ha inflamado las tensiones raciales".

En una declaración conjunta, el gobernador de Colorado Jared Polis y el alcalde de Denver Michael Hancock señalaron: "No hay necesidad de desplegar tropas estadounidenses para mantener el orden en nuestra ciudad. La amenaza del Presidente de desplegar tropas federales es contraproducente y sólo avivará el potencial de una peor violencia y destrucción".

Cerca de 1.600 integrantes de las tropas del Fuerte Bragg y del Fuerte Drum comenzaron a llegar a Washington el 1º de junio. Trump quería 10.000 militares en servicio activo enviados

por todo el país, pero Esper y el Presidente del Estado Mayor Conjunto, el General Mark Milley, según se informa, le convencieron de que no lo hiciera.

"El ejército no está entrenado en el mantenimiento de la paz o en la desescalada. Los soldados están entrenados para utilizar la fuerza letal, que a menudo se emplea contra civiles en tierras lejanas", dijo Condon. "Ahora se les ordena suprimir a los manifestantes pacíficos de este país que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión de acuerdo con la Primera Enmienda".

De hecho, The New York Times informaba que el Pentágono utilizó helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército en Washington "como una muestra de fuerza normalmente reservada para las zonas de combate". El 1º de junio, dos helicópteros volaron a baja altura sobre los manifestantes, obligándolos a correr para cubrirse y arrancar carteles a los costados de los edificios. Con la intención de ser una "presencia persistente", a los pilotos no se les dio ninguna orientación y se les obligó a volar. "La velocidad del viento creada por un helicóptero de baja altura puede levantar objetos y causar graves daños, lo que puede provocar lesiones o la muerte", según un informe de Human Rights Watch.

El 7 de junio, después de que su amenaza de utilizar tropas federales contra personas que ejercían sus derechos constitucionales provocara la condena generalizada de los líderes militares, los funcionarios de defensa y los miembros del Congreso, Trump cumplió con la exigencia de la alcaldesa de Washington Muriel Bowser y ordenó a la Guardia Nacional que se retirara de Washington, añadiendo, "ahora que todo está bajo perfecto control".

Pero Trump había amenazado el 4 de junio diciendo que "todas las opciones están sobre la mesa" y cuando dio la orden del 7 de junio, dijo que las tropas "pueden volver rápidamente si es necesario".

Los generales y los oficiales de defensa se oponen al uso de tropas contra los manifestantes

En una impresionante declaración, 89 ex funcionarios de defensa dijeron el 5 de junio: "Estamos alarmados por la forma en que el presidente está tricionando [su] juramento [de apoyar y defender la Constitución] al amenazar con ordenar a los miembros del ejército de EE.UU. que violen los derechos de sus compatriotas". Escribieron que Trump les dio a los gobernadores "una elección difícil: o bien poner fin a las protestas que siguen exigiendo la igualdad de justicia bajo nuestras leyes, o esperar que envíe unidades militares en servicio activo a sus estados". Los oficiales de defensa pidieron a Trump "que ponga fin inmediatamente a sus planes de enviar personal militar en servicio activo a las ciudades como agentes de la ley, o que los emplee a ellos o a cualquier otra fuerza militar o policial para socavar los derechos constitucionales de los estadounidenses".

Reaccionando a la caracterización de Esper de las calles de EE.UU. llenas de manifestantes, el general retirado del ejército Tony Thomas, que encabezó el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., dijo que el suelo de EE.UU. no debe ser llamado "espacio de batalla" a menos que una potencia extranjera lo invadiera.

Mattis emitió una mordaz reprimenda a la reacción de Trump a las protestas antirracistas. "'Justicia igualitaria bajo la ley' ... es precisamente lo que los manifestantes están exigiendo con razón", escribió en una declaración. "Nunca soñé que a las tropas que hicieran ese mismo juramento se les ordenara bajo ninguna circunstancia violar los derechos constitucionales de

sus conciudadanos, y mucho menos proporcionar una extraña foto para el comandante en jefe electo, con el liderazgo militar a su lado".

El ex secretario de defensa describió como cínica la aparición de Trump frente a una iglesia con una Biblia después de que su administración usara gas lacrimógeno y explosiones para dispersar a una multitud pacífica que protestaba frente a la Casa Blanca el 1º de junio.

Antes de las elecciones intermedias de 2018, Trump también desplegó tropas en servicio activo en la frontera sur de EE.UU. como apoyo para mostrar lo "duro" que era.

La senadora Tammy Duckworth de Illinois, que perdió ambas piernas sirviendo como piloto de helicóptero militar en Irak, dijo que la participación de Esper y Milley en la sesión de fotos de Trump frente a la iglesia "envía un horrible mensaje a nuestras tropas - incluyendo a nuestras tropas negras y mestizas- de que los líderes de nuestras fuerzas armadas no las protegerán de órdenes ilegales".

El deber de desobedecer órdenes ilegales

Los miembros de las fuerzas armadas "obedecerán órdenes legales", escribió el Almirante retirado de la Marina Mike Mullen, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, para The Atlantic. "Pero tengo menos confianza en la solidez de las órdenes que les dará este comandante en jefe, y no estoy convencido de que las condiciones en nuestras calles, tan malas como son, hayan subido al nivel que justifique una gran dependencia de las tropas militares".

El Código Uniforme de Justicia Militar exige que todo el personal militar obedezca órdenes legales. El artículo 92 dice: "Una orden o reglamento general es legal excepto si es contraria a la Constitución, a las leyes de los Estados Unidos". Una ley que viola la Constitución o un estatuto federal es una orden ilegal. Tanto el Manual de Campo del Ejército como los Principios de Nuremberg crean el deber de desobedecer órdenes ilegales.

El uso de tropas federales para la aplicación de la ley civil viola la Ley Posse Comitatus (PCA). La Ley de Insurrección contiene una excepción a la PCA. Pero está reservada para emergencias extremas y se ha usado en gran medida para hacer cumplir, no para violar, los derechos civiles.

Hay cuatro formas de activar la Ley de Insurrección para desplegar el ejército en suelo estadounidense:

Primero, cuando la legislatura o el gobernador de un estado pide ayuda al presidente para sofocar una insurrección contra el gobierno (sección 251);

En segundo lugar, cuando el presidente "considera que los obstáculos, combinaciones o agrupaciones ilícitas, o la rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos, hacen impracticable la aplicación de las leyes de los Estados Unidos en cualquier Estado en el curso ordinario de los procedimientos judiciales" (artículo 252);

En tercer lugar, cuando "cualquier insurrección, violencia doméstica, combinación ilegal o conspiración" prive a las personas de un derecho legal, privilegio, inmunidad o protección, que resulte en la denegación de la igualdad de protección (párrafo 1 del artículo 253); o

Cuarto, cuando "cualquier insurrección, violencia doméstica, combinación ilegal o conspiración... se oponga u obstruya la ejecución de las leyes de los Estados Unidos o impida el curso de la justicia bajo esas leyes". (sección 253(2)).

La mayoría de las veces que se ha invocado la Ley de Insurrección se ha hecho de conformidad con el artículo 251. Por ejemplo, en 1992, el Gobernador de California, Pete Wilson, pidió al Presidente George H.W. Bush que desplegara tropas federales para reprimir un levantamiento después que los oficiales que golpearon a Rodney King fueran absueltos en su juicio estatal.

El artículo 252, que se desencadena por la creencia subjetiva del presidente, le exige que considere que es "impracticable" que los tribunales y el sistema jurídico penal funcionen correctamente. Ese umbral no se ha alcanzado en la situación actual. Aunque es poco probable que los tribunales anulen la decisión subjetiva del presidente, los miembros del servicio pueden decidir que su orden es ilegal y negarse a obedecerla.

Además, no se ha producido ninguna violación de la Cláusula de Protección Igualitaria suficiente para desencadenar el uso del artículo 253, que se promulgó después de la Guerra Civil para garantizar que los estados del Sur hicieran cumplir los derechos federales de los negros. En 1962 y 1963, el Presidente John F. Kennedy utilizó esta sección para enviar tropas federales a Alabama y Misisipi para hacer cumplir las leyes de derechos civiles. Y el presidente Lyndon Johnson también utilizó la sección 253 en 1965 para proteger a los manifestantes de derechos civiles de la violencia policial durante la marcha de Selma a Montgomery, Alabama.

Pero Trump usaría tropas federales para violar, no para proteger, los derechos civiles de los manifestantes antirracistas que ejercían sus derechos en virtud de la Primera Enmienda.

Veteranos por la Paz hizo un llamado a "todos los miembros actuales de la Guardia Nacional a dejar las armas y negarse a luchar contra sus vecinos y compañeros de la comunidad" y para "negarse a servir a los intereses violentos y racistas". VFP citó "una conexión entre el aumento de la violencia racista en los Estados Unidos y la matanza masiva e indiscriminada de cientos de miles de personas en otras tierras". El creciente racismo contra los negros, los morenos y los musulmanes en los Estados Unidos es un reflejo del racismo que justifica el asesinato de personas no blancas en el extranjero".

"A su favor, muchos soldados y miembros de la Guardia Nacional saben que esto está mal", dijo Condon de VFP. "Algunos ya han desertado. Otros están contactando con la Línea de Derechos de los Soldados para obtener información sobre sus alternativas legales. No quieren atacar a la gente aquí en los Estados Unidos".

El Grupo de Tareas de Derecho Militar del Gremio Nacional de Abogados (MLTF) emitió una declaración en la que condenaba enérgicamente el uso de la Guardia Nacional y otras tropas en servicio activo contra los manifestantes antirracistas. El MLTF insta "a cualquier persona que esté activa o desplegada o que pueda estar enfrentando un futuro despliegue, a que nos llame para que le remitamos a un abogado o consejero civil para discutir sus opciones".

Los congresistas se oponen al uso de tropas contra los manifestantes

Casi dos docenas de senadores demócratas escribieron a Esper y Milley, oponiéndose al uso de la Ley de Insurrección para desplegar tropas federales dentro de los Estados Unidos. Lo llamaron "una desviación significativa de importantes usos históricos de la ley". Los senadores "se oponen en los términos más enérgicos al uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos para impedir los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses", quienes, dijeron,

"están ejerciendo sus libertades civiles en un llamado para que las instituciones gubernamentales se mantengan a un nivel más alto en la lucha por la justicia racial". Añadieron que: "El Presidente nunca debe armar a los militares para limitar estas expresiones de libertad y justicia".

El 2 de junio, el senador Tim Kaine de Virginia anunció que propondría esa semana una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para evitar el financiamiento federal del uso de la fuerza militar contra los manifestantes.

Cuando el representante Adam Smith, presidente demócrata de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, lo llamó a testificar sobre el papel de los militares en las protestas, Esper y Milley se negaron.

Aunque la protesta contra el despliegue de las tropas federales de Trump en Washington lo presionó para que las retirara, podría retornarlas en cualquier momento. Debemos estar atentos y mantener la oposición al uso ilegal del ejército por parte de Trump contra los manifestantes antirracistas.

Derechos de autor © Truthout. No puede ser reimpresso sin permiso.

Marjorie Cohn

Marjorie Cohn es profesora emérita de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, ex presidenta del Gremio Nacional de Abogados, secretaria general adjunta de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas, miembro de la junta asesora de Veteranos por la Paz, e integrante del Consejo Consultivo Continental de la AAJ. Su libro más reciente es *Drones y Asesinato dirigido: Cuestiones legales, morales y geopolíticas*.